

El bando de los asesinos

LAS RAZONES DE UNA

EL asesinato de don Angel Berazadi por la ETA inspira numerosas reflexiones. No todas son publicables, dentro de esta irregular situación de la libertad de prensa en que vivimos. La tentación de no tratar un tema cuando no es posible analizarlo en toda su profundidad es fuerte, para evitar una sensación de unilateralidad. Muchas veces hemos procedido así en esta publicación, aun a riesgo de defraudar a lectores que esperaban puntos de vista claros. En este caso se puede y se debe hacer una excepción, porque lo primero y lo primordial que requiere este suceso es la condena inmediata: por sí mismo y como exponente de un contexto nacional. Cualquier secuestro es condenable, cualquier toma de rehenes ha de negarse enérgicamente; cuando va seguido de asesinato, el único juicio inmediato es el de repulsa y negación. Los de examen de las circunstancias son siempre posteriores y menos importantes, pero son necesarios. En política hay distintos bandos, numerosas ideologías, posiciones pasionales o fanáticas, consideraciones filosóficas. Pero hay también un bando independiente de todo ello: el de los asesinos. Se producen en todas las ideologías y en todos los campos. Y bajo todos los pretextos. El bando de los asesinos no puede ser nunca justificado, admitido a la vida cívica, considerado. La vida humana está por encima de todo. Cualquier condena de la violencia, de las muchas que se han publicado en estas páginas en todos los acontecimientos de la vida nacional —y si no lo hemos hecho en algunos ha sido porque, víctimas de otra violencia, nuestra publicación estaba suspendida— deben reaparecer en esta odiosa ocasión. El asesinato del señor Berazadi es un crimen contra todos.

PERO debemos alzarnos también contra la explotación del suceso. Es, está siendo, odiosa. Es una última falta de respeto ante el cadáver del asesinado, otra falta de respeto ante el sacrificio de una vida humana por unos asesinos. Se está tratando de utilizar este asesinato para envolver con él dos problemas: el del País Vasco —y, con él, el de regionalismos, federalismos, descentralización, autonomía o estatuto, o cualquier nombre que se quiera dar a la forma de reconocimiento necesario de las nacionalidades españolas y de su tratamiento justo y necesario— y el de la convivencia nacional por la vía democrática. Se está queriendo utilizar como pretexto. Todo ello puede resultar infame.

EL problema vasco se está tratando mal desde hace decenios. O no se está tratando. Los problemas de regionalización o descentralización se están considerando desde una posición intransigente, basada en la condena a los separatismos —que son otra cosa— y se están dejando llegar a extremos graves. Hecha la condena del asesinato, y esto debe quedar bien claro, y bien a salvo de los juegos de palabras y de las torpes acusaciones en que se están convirtiendo muchos editoriales o discursos que se consideran a sí mismos como políticos, debemos considerar que una serie de tensiones y situaciones falsas en las zonas diferenciadas, a partir de las necias prohibiciones —ya sobrepasadas— de idiomas y costumbres, de cultura y sociedad, que les son peculiares, y llegando a la

no consideración de sus problemas económicos y sociales propios, han favorecido un mal clima. Con otro tratamiento, es posible que no existiese hoy la ETA ni que algunos de sus brazos se hubiesen convertido en criminales fríos, o en secuestradores. La idea que se está emitiendo ahora de que actos como el de la muerte del señor Berazadi impiden que se lleve adelante un programa de reconocimiento de las nacionalidades y de las peculiaridades no son admisibles. Por el contrario, son una señal de urgencia. No se debe de ninguna manera permitir que el caso vasco llegue a ser lo que el del Ulster en la Gran Bretaña —advirtamos que las motivaciones, el fondo histórico, la situación económica, son enteramente distintos y no comparables—, y ello podría producirse si la autoridad no mantuviese la serenidad y la frialdad de juicio que se requiere en los Estados civilizados.

SI la identificación del crimen con el problema vasco es injusta en cualquiera de los dos sentidos —en el de favorecer o en el de desfavorecer una solución que no debe tener en cuenta el suceso—, su relación con la idea general de la democracia, apuntarla al bando de la izquierda, o utilizarla en contra del final de la dictadura, es más grave aún. Un asesinato, por cruel y detestable que sea, y por disfrazados que estén de política sus móviles, no puede repercutir sobre la vida nacional. Si ésta está emponzoñada, debe comprenderse bien que es por otras razones. Un responsable político ha comentado el hecho así: "Crímenes de esta naturaleza hacen imposible la convivencia nacional y echan por tierra los proyectos de razonable reforma que, sin duda, es una de esas cosas que quiere la izquierda inmovilista que fomenta, a toda costa, el descontento nacional" (Enrique Thomas de Carranza, presidente de la asociación política ANEPA). He aquí un ejemplo de la utilización siniestra del asesinato: desmontar la "razonable reforma" y achacar los planes a la "izquierda", tergiversarla llamándola inmovilista, y de alguna manera culpabilizándola del crimen. Un comentarista político ha escrito que hay que hacer justicia no sólo con los asesinos, sino "también con los blandos, con los conformistas, con los tolerantes" (Ruiz Gallardón en "ABC"). La intolerancia frente al crimen es admisible. La utilización del crimen para condenar —y pedir "que se haga justicia" en contra— a la tolerancia, como virtud de convivencia nacional, es una utilización política del cadáver contra lo que debe ser la base del entendimiento y la convivencia: la tolerancia de unos con otros. La condena a los "blandos" entraña una exaltación de los "duros". Y ya está bien de dureza en este país. Si nosotros condenamos a los asesinos del señor Berazadi es precisamente porque la expresión más visible de la dureza y de la intolerancia es el asesinato. Invertir los términos del asesinato para condenar a los blandos y a los tolerantes —lo de "conformistas" ni tiene sentido, a no ser el de una condenación para quienes no se alzan contra la forma de conducirse de la autoridad actual— por el mismo asesinato que representa la dureza y la intolerancia es una tergiversación de las realidades considerablemente grave.

YA está bien de dureza en este país. Ya está bien de teñir la vida nacional de semblantes hoscos, de amenazas, de riesgos para todo. La hostilidad, el odio y el miedo están pro-

CONDENA

tagonizando la circunstancia de nuestra sociedad. No hay discurso o proclama política, aun desde el poder, que no esté teñida de tormentas, de amenazas y advertencias. Los anónimos y las llamadas telefónicas con anuncios de muerte o actos físicos de violencia. Las ha recibido hasta don Antonio Buero Vallejo, cuya falta principal ante ese bando de los asesinos es, precisamente, el estreno de una obra de teatro donde se condenan, indiscriminadamente, sin utilidades políticas a favor o en contra de nadie, la tortura y la violencia en la vida política. Es absolutamente necesario un desarme psicológico en el país. Una organización de la convivencia en el sentido de que todos entendamos la existencia de los demás. Estas amenazas anónimas no se están limitando a crear un clima: se están cumpliendo. El atentado contra el periodista Martínez Soler es un cumplimiento de esas amenazas. El asesinato del señor Berazadi es otra. No se puede ahora clamar por la dureza o por la intolerancia sin hacerse de hecho gravemente responsable o cómplice de cosas que pueden suceder. Por el contrario, hay que pedir a todos, de todos los bandos, que extremen su tolerancia para con los demás, y su comprensión, y su esfuerzo de entendimiento. Para acabar con el bando de los asesinos.

...

ES aberrante la idea de que una democracia abierta y un sentido de la convivencia nacional a base de la comprensión y respeto a las minorías y de la expresión de la voluntad del pueblo es más proclive a la violencia o más blanda con el terrorismo. Pedir que se sustituya con lo que a la larga sería un terrorismo de Estado es inadmisibile.

...

COMO es inadmisibile la tesis de que la violencia, la dureza o la crueldad es un patrimonio de los españoles. Lo estamos viendo con demasiada frecuencia. Hace unos días, don Torcuato Luca de Tena definía al español colectivamente como "estúpido y malvado". En un periódico que busca frecuentemente la serenidad en sus juicios ("Ya") leemos este otro comentario: "Un colega se indigna mucho porque dice que Kissinger nos ha llamado cafres políticos porque los españoles no estamos acostumbrados a resolver pacíficamente nuestras diferencias. El colega debía mirar hacia atrás, hacia nuestra historia. Le recomendamos 'La historia política de las dos Españas', de García Escudero. Y la verdad, tal como se están planteando las cosas, parece que hemos aprendido poco". Nada de esto es cierto. Sin buscar más allá del continente europeo podemos ver que otros países con mayor fama de "carácter nacional" templado y frío han llegado tan allá como nosotros, o más, por este camino de la violencia y el terror. Recordemos la historia reciente de Alemania y el nazismo. Pensemos en la dureza de la guerra civil que supuso para Franco la ocupación y la liberación en la última guerra mundial; y en los años terribles en que el conflicto de Argelia trasladó a su metrópoli las bombas, los secuestros y las metralletas. Si un secretario de Estado de los Estados Unidos nos puede llamar cafres, es porque no recuerda la historia de su país que parte de la guerra de secesión —en que se inventaron los campos de concentración para prisioneros políticos—, hasta la del Vietnam. Desgraciadamente, ningún país tiene el monopolio de crueldad. Repudiamos este fatalismo que nos puede llevar a justificar de alguna manera los actos

de violencia por una especie de carácter nacional, inexistente, lo cual serviría al mismo tiempo para justificar una represión, una dictadura, una situación de dureza. Pasar de ahí a decir que en España han fracasado siempre los regímenes liberales o democráticos, o que los partidos políticos han sido la causa de la perdición nacional, requiere un breve paso. Y parece, sobre todo, una grave falta para con este país. Como una identificación de la existencia de España con determinados sistemas o regímenes. La existencia de España está por encima de todo ello, viene de siglos y siglos y lo único que puede desaparecer es un monopolismo del nombre de España, defendido por la elevación al absurdo de la catástrofe cualquier movimiento político inverso. El señor Fernández de la Mora (conferencia en Lérida) acaba de decir que la pluralidad sindical "sólo nos lleva a una lucha de clases y a una guerra entre españoles"; y de confundir la Coordinación Democrática con un Frente Popular, y éste con la catástrofe y el asesinato: "Ya está aquí el Frente Popular, constituido a instancias del PC y el PSOE, asesinos de Calvo Sotelo, inductores de la huelga revolucionaria del 17, de los sucesos de Asturias, de los asesinatos de sacerdotes y obispos". Este pensador acaba de ser premiado con su elección como consejero nacional por el sistema de cooptación dentro del Cuerpo, cuando en realidad debería haber sido descalificado: no porque defienda una autocracia, un fascismo o cualquier otro sistema político, a lo cual tiene todo el derecho que le concedan las leyes —hasta que el totalitarismo aparezca explícitamente condenado por ellas—, sino por su incapacidad para comprender y juzgar los fenómenos políticos actuales, por el enredo semántico e histórico de sus palabras. Es un exponente de las ideas en boga del catastrofismo —"a menos que"...—, de la acusación contra el "carácter nacional" de los españoles y de la creación de una hostilidad y hosquedad del ambiente político español de estos días.

...

VAYA una reiteración de la condena del asesinato del señor Berazadi, incluida dentro de una condena general a todos los actos de violencia y crueldad de nuestro tiempo; vaya una reiteración de nuestra aseveración que nuestra época y nuestro país no son ni mucho menos los más violentos en el tiempo y la Historia, y en contra de la capitalización del crimen por cuestiones políticas, nacionales o regionales. No hay que producir una inflación nacional de un suceso totalmente repudiable, pero encerrado en sí mismo: cuanto más contribuyamos todos a entender esta limitación del asesinato a su puro hecho, a sus autores y a sus cómplices, más fácil será reprimirlo y prevenir otros, y más fácil será cambiar el ambiente hostil del país por otro. Con nuestra explícita y reiterada condena, condenemos también a todos aquellos, de cualquier bando político, que se excluyen deliberadamente de él para pasarse al bando de los asesinos, de los creadores del terror, de los defensores de la dureza, de los enemigos de la tolerancia. Y de quienes hacen pretexto de él para justificar sus retrasos, sus demoras, sus indecisiones. El Gobierno ha advertido ya que sucesos como éste no impedirán que continúe su "proceso democratizador". El Gobierno sabe, sin duda, que lo que impide el proceso democratizador no son estos sucesos, estos asesinatos, sino otros factores a los que no tiene tanta facilidad para declarar la guerra.